

"varios miembros de la Asociación, designados al efecto, prepara-
 "ron un resumen de la legislación impositiva vigente, el que
 "fue oportunamente remitido al Instituto.

"IX. DECLARACIÓN SOBRE EL DECRETO N° 6480/62.

"La Asociación hizo pública la siguiente declaración:
 "Visto el decreto n° 6480/62 por el que se establece un régimen
 "de regularización patrimonial mediante la declaración jurada
 "de los capitales no justificados, se instituye un sistema de
 "condonación de sanciones por infracciones tributarias, se exige
 "el cumplimiento previo de ciertos requisitos fiscales para la
 "realización de determinados actos y operaciones y se crea
 "un régimen de sanciones fiscales accesorias, por una parte,
 "y el quince efectuado por el Ministerio de Economía de
 "la Nación sobre la creación de un impuesto al patrimonio,
 "de un gravamen transitorio a las altas rentas en substitución
 "del actual impuesto a los beneficios extraordinarios y el aumento
 "del impuesto a los réditos de las sociedades anónimas, por otra
 "parte,

"la Asociación Argentina de Estudios del Derecho Fiscal,
 " DECLARA

"Que coincidente en la necesidad de eliminar el déficit fiscal
 "como punto de partida para el saneamiento de las finanzas
 "nacionales, considera que debe encarsarse una acción efectiva
 "y terminante para atacar el principal factor del déficit: las
 "exposiciones en constante crecimiento de la administración
 "central y el resultado negativo de ciertas empresas estatales, y
 "no centar exclusivamente la acción para lograr el equilibrio
 "en el aumento de los recursos fiscales.

"Que a través de las medidas dictadas y anunciadas, se acentuará
 "notoriamente el peso de la imposición más allá de la capacidad
 "contributiva de los obligados, porque no se ha producido la
 "reactivación generadora de nuevos bienes y servicios, creadores
 "de una riqueza imposible que sirva de base a una mayor
 "contribución fiscal; el aumento de la presión tributaria en

" estas condiciones, actuará en desmedro de la capacidad de inversión
 " de los contribuyentes, ya que generalmente se sacrifica ella antes que
 " la capacidad de consumo.
 " Que en relación al blanqueo de capitales, considera que ni la
 " cifra del impuesto que se percibirá por su conducto, ni la mayor
 " subscripción del empréstito que se pueda lograr por vía de tal
 " supuesto incentivo, justifican que un gobierno se aparte de pos-
 " tulados que hacen al orden jurídico, a la moralidad pública
 " y a la inflexibilidad de los gobernantes en el manejo de los
 " intereses públicos, permitiendo la legitimación de rentas que evadie-
 " ran el impuesto, mediante el acreditamiento de que se encuentran
 " capitalizadas o declarando que han sido consumidas, y pagando
 " un "precio" muy barato en comparación con lo que defraudaron al
 " fisco. Por blanqueos en el lapso de seis años y consiguientes, como
 " naciones fiscales, contribuyen a crear una conciencia contraria al
 " verdadero concepto de la obligación fiscal. Elal puede seguirse
 " acentuando la prédica acerca del carácter realmente selectivo
 " desde el punto de vista jurídico, social y moral de la evasión fiscal,
 " si con frecuencia los gobiernos defraudados legitiman estos delitos
 " y colocan a sus agentes en iguales condiciones con los que han respe-
 " tado la ley, exigiéndoles sólo una parte mínima y notoriamente
 " inferior a la carga que soportaron estos últimos.
 " Que reiterando lo que manifestáramos en nuestra nota dirigida al
 " señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la
 " Nación en fecha 20 de octubre de 1961, apoyamos todas las medi-
 " das tendientes a reprimir o evitar la evasión fiscal y a asegurar
 " el correcto y tempestivo ingreso de los impuestos al erario, pero dis-
 " crepamos con el excesivo rigorismo que, para facilitar la fis-
 " calización impositiva, impide al individuo el libre ejercicio de
 " los más elementales derechos patrimoniales - comprar, vender, ase-
 " gurarse, obtener créditos, etc. - sin el previo acreditamiento del
 " cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Creptamos que se
 " busquen los medios más eficaces y generales para individualizar
 " al contribuyente, exigiéndosele la acreditación de tal circunstancia

" para el cumplimiento de actos propios de su vida de relación,
 " pero no ir más allá, requiriéndole el acreditamiento del ingreso
 " de sus impuestos, porque ello es de resorte único y exclusivo de
 " la Dirección General Impositiva, que no puede seguir delegando
 " en terceros, aun cuando sean otras reparticiones del Estado, la
 " tarea para la cual debe estar suficiente y eficazmente dotada.
 " Que la facultad acordada a la Dirección General Impositiva
 " en los casos de defraudaciones de aplicar simultáneamente con
 " las multas a que hubiere lugar, sanciones accesorias, como la
 " clausura de establecimientos, la cancelación de cuentas bancarias
 " y la prohibición de inscribirse en los registros de importadores,
 " exportadores y despachantes de aduana, plantea el serio interroga-
 " ntorio del alcance que se ha querido dar a esta facultad de por-
 " visionar acordada a la administración fiscal. Sabemos que en mate-
 " ria de multas las mismas no pueden hacerse efectivas si no se
 " encuentran firmes, por haberlos consentido el infractor o por
 " haber recaído resolución definitiva en los estrados judiciales.
 " Las sanciones accesorias a que se refiere el Decreto N° 6480/62,
 " por su carácter de tales, no pueden seguir sino el mismo meca-
 " nismo establecido por la ley 11683 para las multas, por lo que
 " debemos advertir a tiempo, que no puede pretenderse inferir de
 " la amplitud del texto de la disposición que comentamos, que
 " las sanciones accesorias hayan de ser aplicadas por la sola compo-
 " sición y decisión administrativa.
 " Que el impuesto al patrimonio que se creará para financiar
 " el empréstito, merece la objeción de principio propia a todas
 " los impuestos al capital, que son contrarios al esquema de
 " una política fiscal que procura servir de instrumento a una
 " política económica que tiende a la formación de capitales, como
 " medio indispensable para incrementar la creación de bienes y
 " servicios.
 " Que la creación del impuesto de emergencia a las altas rentas,
 " en substitución al actual gravamen a los beneficios extraordina-
 " rios, importará alterar substancialmente el concepto de "alta renta"

"pues mientras actualmente se ha determina en función del capital
 "de la empresa, en el gravamen que se proyecta será considerada
 "tal por su simple expresión numérica. Se presentará así otro
 "gravamen en el cuacho general, que tiende a desalentar la
 "inversión, pues la mayor imposición no ha de reducir la utili-
 "dad a distribuirse, sino la que se destina para capitalización,
 "porque la defensa del nivel de la empresa, de sus cotizaciones,
 "y de su estabilidad, requiere mantener adecuados niveles de dis-
 "tribuciones.

"Que con el aumento del impuesto a los réditos de las sociedades
 "anónimas y la eliminación del dividendo como rédito de la segunda
 "categoría, se reitera y se consagra una mayor injusticia tributaria,
 "consolidándose el sistema del impuesto real a las sociedades, en
 "desmedo de la justa imposición a los accionistas de niveles infe-
 "riores. Además de acentuarse su característica de impuesto no
 "proporcional a la capacidad contributiva de las sociedades al
 "gravar en la misma medida las rentas de cualquier volumen
 "y de importar una carga tributaria indirecta excesiva para los
 "accionistas pequeños, se desalienta la capitalización de las empre-
 "sas que deberán tributar el mismo gravamen, distribuyan o no
 "sus utilidades. Reiteramos sobre el tema nuestra declaración del
 "16 de julio de 1958.

"Que el problema más importante que preocupa a esta Asam-
 "blea, es el que se relaciona con la validez de las medidas finan-
 "cieras que se han dictado o se dictarán por simples decretos
 "del Poder Ejecutivo, con la sola obligación de dar cuenta por-
 "tunamente al Honorable Congreso de la Nación.

"Que la emisión de un empréstito, así como la creación, aumento
 "o exención de impuestos y la determinación de nuevos tipos de
 "infracciones fiscales y de sanciones para reprimirlas, dispuestos
 "por decretos del Poder Ejecutivo, son medidas anticonstitucio-
 "nales, tanto como lo serían la modificación por decreto del
 "Código Penal, del régimen de fondo de las sociedades o de
 "instituciones del derecho de familia.

" Que de acuerdo a la Constitución, sólo corresponde al Congre-
 " so de la Nación contraer empréstitos de dinero y demás operacio-
 " nes de crédito y establecer los impuestos directos o indirectos
 " (arts. 4, 14 y 67, incs. 2º y 3º). Estas normas no hacen más
 " que concretar el principio de legalidad en materia financiera
 " y son garantías consagradas por la Corte el, agna en de-
 " fensa del patrimonio del Estado y de los particulares, conve-
 " niendo mediante el sistema de la división de los poderes, la
 " seguridad de los derechos individuales.

" Que como lo declaró esta el, oración en fecha 16 de enero
 " de 1959 con motivo de la sanción de la ley 14.789, la juris-
 " prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
 " sostenido invariablemente, que los principios y preceptos consti-
 " tucionales son categóricos en cuanto prohíben a otro poder que
 " el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y
 " tasas, declarando inconstitucional aún la delegación legisla-
 " tiva de tales facultades al Poder Ejecutivo

" Que las facultades legislativas no pueden ser ejercidas por
 " el Poder Ejecutivo ni aún durante el receso del Congreso, porque
 " en estas circunstancias ordinariamente transitorias, están expresa-
 " mente previstas las facultades del Poder Ejecutivo, como son las
 " señaladas en el inciso 19) del artículo 86 - estado de sitio - y
 " en el inciso 22) - nombramientos en comisión -.

" Que no ignoramos la necesidad en que se encuentra el
 " gobierno de munirse de los instrumentos fiscales necesarios
 " para atender a la gravedad de la situación imperante, pero
 " pretender mantenernos dentro de los lineamientos del derecho, no
 " es pecar de insensibilidad o de falta de realidad, sino colocar-
 " nos en la misma posición de derecho que ha adoptado el
 " Gobierno, que reiteradamente proclama su estado de "fure".

" Que "la necesidad y urgencia de asegurar la regularización
 " patrimonial e impedir el fraude fiscal," a que aluden las consi-
 " derandos del decreto N° 6480/62, no puede como se dice en dichas
 " considerandos," justificar de por sí el ejercicio de la potestad

"legislativa ante el receso del Honorable Congreso de la Nación,"
 "porque ni esa necesidad ni esa urgencia hallan calida dentro de
 "la interpretación doctrinaria o jurisprudencial de los textos constitu-
 "cionales. Si el Gobierno es de "pure" que se encuadre en la consti-
 "tución y la respete; si en cambio, se trata de un gobierno de
 "de "facto", previa la exclusión del Poder Legislativo y mediante
 "el instituto de los decretos-leyes, podrían regularse todas las
 "situaciones que el estado de urgencia y necesidad reclama, de
 "acuerdo a la teoría consagrada por la jurisprudencia de la
 "Corte Suprema de Justicia respecto de los regimenes de "facto."
 "Que consideramos peligroso e inconveniente dictar regulaciones esen-
 "ciales al desenvolvimiento del Estado, bajo la presunción de que
 "ulteriormente ellas han de ser convalidadas por el alto Tribunal
 "de la República en nuevas interpretaciones de los principios cons-
 "titucionales, porque se lesiona el prestigio de las instituciones
 "jurídicas al ponerlas de continuo en juicio entre Estado y goberna-
 "dos, porque se afecta la estabilidad de los ingresos fiscales al
 "someterlos al ítem de juicios de repetición y porque debemos prae-
 "var que la fuerza de los hechos en momentos determinados, no
 "quielue la real y auténtica interpretación de los principios cons-
 "titucionales, que constituye la garantía final de los derechos
 "y libertades ciudadanas. Buenos Aires, julio 20 de 1962.

"X. INCORPORACIÓN DEL DR. RAFAEL BIELSA COMO MIEMBRO

"HONORARIO.

"De acuerdo a los términos de los estatutos que autorizan la designa-
 "ción como miembros honorarios de aquellas personas que se
 "destaquen por sus relevantes títulos, antecedentes y actividades vincu-
 "ladas a los fines de la Asociación, el Consejo Directivo procedió
 "a designar por unanimidad primer miembro honorario de la
 "Asociación al profesor Rafael Bielsa, cuya fecunda actuación
 "en el mundo del derecho público, como profesor, publicista y
 "crítico de la realidad política y económica argentina, le hacía
 "acorde a esta designación que honra a nuestra Asociación.
 "Su incorporación tuvo lugar en un acto público que se celebró el